



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 10
CPE 652/2022

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa **N° 652/2022**, caratulada: “**N.N. S/ INFRACCIÓN LEY 24.769**”, del registro de la Secretaría N° 20 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a mi cargo.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que, las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia efectuada por Beltrán Amadeo TAILHADE, Jaime Esteban BOUQUET ROLDÁN y María OVEJERO, socios del estudio contable TBO, contra personas cuya identidad desconocían, quienes se habrían valido de las claves fiscales de Beltrán Amadeo TAILHADE y Juan Oscar Eduardo POPKEN, cliente del estudio contable, para acceder al sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y presentar, al menos, cinco declaraciones juradas de impuestos las cuales consignarían datos falsos e inexactos.

2°) Que, por la presentación de fs.78/92 Juan Oscar Eduardo POPKEN, con el patrocinio letrado de la Dra. María Belén MURILLO y del Dr. Robertino LOPETEGUI, solicitó ser tenido por parte querellante en estas actuaciones por los hechos que a continuación se describen:

a) presentación de una declaración jurada original correspondiente al Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2020, respecto del peticionante Juan Oscar Eduardo Popken (CUIT: 20-12488295-9) por cual se declaró un saldo a ingresar a favor del Fisco Nacional por la suma de \$17.192.085,25.

b) presentación de dos declaraciones juradas originales correspondientes al impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 02/2021 y



#36821131#347438810#20221102104442007



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 10
CPE 652/2022

03/2021, de la contribuyente Mandry-Popken Sociedad de Hecho (CUIT: 30-70943121-4) por cual se declaró un saldo a ingresar a favor del Fisco Nacional por la suma de \$754.829,64 y \$273.798,35, respectivamente.

c) presentación de una declaración jurada original correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales, por el período fiscal 2020, respecto del peticionante Juan Oscar Eduardo Popken (CUIT: 20-12488295-9) por la suma de \$286.506.

3°) Que, los hechos denunciados fueron calificados por el señor representante del Ministerio Público Fiscal *“prima facie”* en los términos del artículo 11 inc. “a” del Régimen Penal Tributario establecido por el art. 279 de la Ley 27.430.

4°) Que, en los términos del artículo 82 del C.P.P.N., toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante.

Al respecto, se ha expresado que la persona *“particularmente ofendida”* es aquella que, de modo especial, singular, individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporta (confr. D’ALBORA, Francisco J.; *“Código Procesal Penal de la Nación”*, Ed. Abeledo Perrot, 1996, págs. 125/126).

En esta línea, y en orden al máximo nivel normativo en que se ubica el derecho a querellar en nuestro país, cabe recordar que: *“...el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos incorporada por el art. 75, inciso 22 de la C.N., establece la obligación de los Estados de proveer a los ciudadanos sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violado, siempre que ese derecho le sea reconocido por la Convención, por la Constitución o las leyes internas del Estado (Informe 35/96 de la CIDH), por lo que la tutela efectiva le corresponde a quien ha resultado menoscabado en su derecho derivado simplemente de su condición de víctima, de reclamar al Estado el enjuiciamiento del autor (confr. CAFFERATA NORES, José, “Derecho a la justicia del querellante y posición desincriminatoria del Ministerio Fiscal”, en AAVV, En torno al*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 10
CPE 652/2022

querellante particular, Editorial Advocatus, 2003, págs. 20 y 21.” (confr. voto de la señora juez de cámara doctora Carolina L. I. ROBIGLIO en el pronunciamiento Reg. N° 661/18 de la Sala “B” de la C.N.P.E.).

5°) Que, por otra parte, por la reforma introducida por el Título IX de la ley 27.430 (sancionada el 27/12/2017 y publicada en el Boletín Oficial el 29/12/2017), si bien se aprobó un nuevo Régimen Penal Tributario, se mantuvo la redacción anterior del artículo 23 que establece que: *“El organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular a través de funcionarios designados para que asuman su representación”.*

En este sentido, debe recordarse que *“...mediante el delito fiscal se lesiona la hacienda pública, por lo tanto, parte del bien jurídico que pudo haber resultado afectado en las presentes actuaciones **sería el patrimonio del erario público**. Aquél no se protege en virtud de un interés patrimonial individual, **sino en consideración a intereses patrimoniales supraindividuales**, a cuyo servicio están los delitos contra el orden económico o la economía nacional...”* (el destacado pertenece a la presente; confr. Miguel Ángel MACCHI, Sistema penal tributario y de la seguridad social”, Buenos Aires, Depalma, 1.999, pág. 99, y Reg. N° 510/03 de la Sala “B”).

Por ello, la jurisprudencia ha reconocido que el bien jurídico tutelado por el régimen penal tributario se centra en la protección de *“...un interés macroeconómico y social, consistente en la hacienda pública...esto es, bajo la faz dinámica de permitir que los gastos y la distribución de beneficios para amplios sectores de la sociedad quede asegurado con un régimen de ingresos de tributos y aportes que se debe proteger contra las conductas evasoras...”* (C.N.C.P., Sala I., “Amorena H. s/rec.casación” 17/11/95); que la legitimidad para ser tenido como parte querellante surge de la lesión de un bien jurídico protegido por la ley, que como regla general, corresponde al titular del derecho violado, o sea, al particular ofendido por el delito (C.N.P.E., Sala “B”, Regs. N° 263/96, 353/96, 619/97, 198/98, 986/99 y 737/00.), y que





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 10
CPE 652/2022

se ha considerado que *“...en el caso de la ley penal tributaria, el damnificado sólo puede ser el Fisco Nacional (A.F.I.P./D.G.I.) ...”* (cfr. Regs. N° 57/01, 563/02, 510/03 de la Sala “B”).

6°) Que, sin embargo, en atención a la singularidad del caso *“sub examine”*, corresponde hacer una excepción a la aplicación del criterio recordado por el considerando anterior, debido a las circunstancias de excepcionalidad que se presentan en el *“sub lite”*, las cuales involucran la presentación de declaraciones juradas de impuestos inexactas y falsas, a partir de la utilización fraudulenta de la clave fiscal del pretenso querellante. Las mismas habrían sido presentadas sin el consentimiento ni aprobación de ningún integrante del estudio contable TBO, como así tampoco por Juan Oscar Eduardo POPKEN, lo cual impone examinar la petición sometida a estudio también desde la perspectiva de los perjuicios de variada índole que podrían afectar al nombrado pues los hechos mencionados por el considerando 2° de la presente, eventualmente, podrían no sólo encontrar adecuación típica en las figuras establecidas por la ley penal tributaria, sino también en otras figuras penales, como ser el delito previsto por el artículo 292 del Código Penal.

7°) Que, en ese sentido la Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional en lo Penal Económico estableció que: *“...el examen que corresponde efectuar conforme a lo expresado por el considerando anterior no dejaría de ser pertinente aun en el supuesto de entenderse que los actos de falsificación denunciados podrían integrar, según el caso, un hecho único con una múltiple significación jurídica, dado que por aquella situación hipotética, de todas maneras, no se inhibiría la posibilidad de reconocer legitimidad, para constituirse en parte querellante, a quien pudiese aparecer como damnificado por sólo uno de los tipos penales involucrados...”* (confr. Regs. Nos. 173/07 y 229/12 de la Sala mencionada).

En el mismo sentido, la Sala “A” de esa misma Cámara sostuvo que: *“... las consecuencias perjudiciales de la maniobra denunciada pueden ser de variada*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 10
CPE 652/2022

índole y, en el caso, las explicaciones brindadas por el recurrente, referidas al eventual perjuicio que los hechos pueden traer a la entidad, deben ser atendidas brindándole la oportunidad de hacer valer sus derechos en el proceso". (confr. Reg. 741/08 y voto del doctor Nicanor Miguel Pedro REPETTO en el pronunciamiento del Reg. 229/12, ambos de la Sala "A").

8°) Que, por lo expresado, corresponde hacer lugar a la solicitud de ser tenido por parte querellante formulada a fs. 78/92 por Juan Oscar Eduardo POPKEN, con el patrocinio letrado de la doctora la María Belén MURILLO y el Doctor Robertino LOPETEGUI.

Por todo ello, corresponde y así **RESUELVO:**

I.- TENER POR PARTE QUERELLANTE A JUAN OSCAR EDUARDO

POPKEN, con el patrocinio letrado de la doctora la María Belén MURILLO y el Doctor Robertino LOPETEGUI, y por constituido el domicilio legal en la calle Ayacucho 1435, 9° "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y electrónicos en el CUIT nro. 27299517352 y CUIT nro. 23308333779, con relación a los hechos mencionados por el considerando 2° de la presente.

II.- SIN COSTAS (artículos 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

Regístrese, protocolícese, notifíquese al señor representante del Ministerio Público Fiscal y al peticionante mediante cédulas electrónicas.

Fecho, vuelva la presente causa a la fiscalía interviniente en los mismos términos de fs. 19. Sirva el presente de atenta nota de envío.



#36821131#347438810#20221102104442007